



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: GLORIA PATRICIA CADAVID ZAPATA
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES; y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 013 2018 00774 01
Sentencia: S-084

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 25 de junio de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

GLORIA PATRICIA CADAVID ZAPATA demandó a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no haberle proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además se condene a PROTECCIÓN S.A. al pago de los perjuicios ocasionados en la suma de 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que se condene en costas a ambas demandadas.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 9 de enero de 1960; que se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual administrado por la AFP PROTECCIÓN S.A. el 01 de octubre de 1995, cuando laboraba al servicio de la Clínica Oftalmológica de Antioquia; que un asesor del fondo privado le realizó la afiliación sin explicarse las desventajas de esa decisión, sin brindarle una explicación completa de su situación pensional y sin realizar una proyección de su caso particular; que el engaño sufrido la ha sumido en un constante estado de preocupación y desazón, lo que se traduce en la generación de un perjuicio moral; y que en toda su vida laboral tiene 1277 semanas de cotización.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante y su traslado a la AFP PROTECCIÓN en el año 1995. Frente a lo demás, señala que no le consta al tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento que deben ser probadas dentro del proceso. Se opuso además a las pretensiones teniendo en cuenta que el actor

no cumple con los requisitos estudiados por la jurisprudencia laboral para determinar la viabilidad de la nulidad o ineficacia de traslado. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación de declarar la nulidad o ineficacia de la afiliación, prescripción, imposibilidad de condena en costas y buena fe.

PROTECCIÓN S.A. a su turno, acepta lo relacionado con la fecha de nacimiento de la demandante y la vinculación al Régimen de Ahorro Individual en el mes de octubre de 1995, pero aclara que la afiliación se dio en estricto cumplimiento de todos los parámetros legales de la época por lo que el mismo constituye un acto jurídico válido y eficaz que produce efectos hasta la fecha. Agrega que la asesoría suministrada fue amplia, correcta, clara, comprensible y suficiente sobre todos los aspectos del RAIS, lo que da cuenta de una afiliación consciente e informada. Se opuso además a las pretensiones de la demanda y como excepciones propuso prescripción, falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, buena fe, falta del juramento estimatorio de perjuicios como requisito procesal, aprovechamiento indebido de recursos públicos e inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración por falta de causa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 25 de junio de 2020, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual, ordenando su regreso y reactivación a COLPENSIONES sin solución de continuidad. Ordenó además a PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES la totalidad de valores recibidos con ocasión de la afiliación de la demandante, incluyendo los rendimientos financieros y gastos de administración, entidad a la que además condenó en costas, fijando como agencias en derecho la suma de \$1 '900.000. De la pretensión de indemnización de perjuicios ABSOLVIÓ a la AFP PROTECCIÓN S.A.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión el apoderado de la demandante insiste en el reconocimiento de los perjuicios reclamados, pues de la teoría de responsabilidad tanto contractual como extracontractual, se ha estructurado una configuración de la responsabilidad civil con 4 elementos: el hecho, el daño, el nexo causal y una antijuridicidad. El hecho, el daño y el nexo causal quedaron probados con la sentencia que se profiere, es decir, se presentó una omisión en la información.

Con toda la normatividad respecto al deber de información, hay una obligación legal para las AFP especialmente desde el decreto 663 de 1993, cuando se les dio el tratamiento de entidades financieras. Este hecho ha puesto a la demandante en una situación de conseguir un abogado, celebrar un contrato sin que se haya acudido al amparo de pobreza y si bien debía cumplir con la carga de la prueba, a fls. 65 obra contrato de prestación de servicios, lo que constituye plena prueba al no haber sido tachado, controvertido o desestimado, por lo que tiene pleno merito probatorio para fundar una condena. Así las cosas, el daño es determinado porque se generó un pago por concepto de honorarios profesionales, sin haberse hecho valoración probatoria alguna. Es un daño generado por la omisión en la información suministrada por PROTECCIÓN S.A., quien debe asumir el perjuicio causado, sin que se pueda considerar que las costas reemplazan los honorarios profesionales de abogado, las cuales se causan por llevar adelante el proceso, siendo conceptos distintos al daño emergente que se reclama.

PROTECCIÓN S.A. por su parte, cuestiona la condena de traslado de cuotas de administración y seguro previsional, por ser descuentos legales, exequibles y vigentes, que se realizan en cualquiera de los dos regímenes, de modo que también se le hubieran hecho de haber permanecido en COLPENSIONES. Además, son dineros que no tienen como finalidad financiar la mesada pensional, sino que tienen

destinación específica, plenamente sustentados en los rendimientos que generaron los aportes de la demandante durante el tiempo que estuvo afiliada y que representa un 164% por encima de lo aportado.

Agrega que si la consecuencia de la ineficacia es que todo vuelva al inicio y entender que siempre estuvo afiliada a COLPENSIONES, la condena debería ser ordenar el traslado solo del valor de las cotizaciones, más los rendimientos generados en el RPM que son menores al que genera en RAIS, de modo que con esta condena se incurre en un enriquecimiento sin causa por COLPENSIONES, toda vez que recibe los rendimientos fruto de una administración así como el valor mismo por una administración que no ejerció. De considerar oportuna la condena de primera instancia, solicita se aplique la prescripción a las cuotas de administración por ser dineros que no tienen vocación de financiar la mesada pensional.

Se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó dentro del término alegatos de conclusión indicando que el análisis de la información suministrada por la AFP y el alcance de la asesoría que debió brindar al momento de la afiliación, deben ser valoradas bajo la normatividad vigente para la fecha de suscripción del formulario o de la materialización del traslado; por lo tanto, no es razonable ni jurídicamente válido, imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen, pues tal exigencia desvirtúa el principio de confianza legítima. Solicita se revoque la sentencia ya que con el hecho de reconocer la ineficacia del traslado que de manera libre y voluntaria realizó la demandante, se le está imponiendo una

obligación a COLPENSIONES que normativamente no está llamada a soportar, además de valorar la buena fe en la actuación desplegada en el asunto objeto de litigio. En el evento de confirmar la sentencia de primera instancia, solicita que ésta sea adicionada en el sentido de ordenar a la AFP PROTECCIÓN, que devuelva o traslade a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido durante el tiempo de permanencia de la actora en la AFP y que se haya causado con motivo de la afiliación o traslado, es decir, que no se traslade solo los recursos de la cuenta individual de la demandante junto con sus rendimientos y cuotas de administración como lo ordeno la a quo, sino también, lo que corresponde a seguros previsionales y descuento de la garantía de pensión mínima. Igualmente, solicita que todos los valores a trasladar sean debidamente indexados.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por los apoderados de la demandante y de PROTECCIÓN S.A. a través de sus respectivos recursos de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA con el objeto de salvaguardar los intereses de COLPENSIONES, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la Sra. GLORIA PATRICIA CADAVID ZAPATA realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que PROTECCIÓN S.A. queda en la obligación de devolver.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** GLORIA PATRICIA CADAVID ZAPATA nació el 9 de enero de 1960 (fls. 19); **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 28 de febrero de 1983, acumulando en esa entidad un total de 23.14 semanas, fls. 21 y 108; **(iii)** también estuvo vinculada al servicio del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA entre

el 8 de febrero de 1984 y el 4 de marzo de 1985, aunque sin que en ese entonces se le hubiera realizado afiliación a caja o fondo de pensiones, así como tampoco descuentos destinados a Seguridad Social; y **iv)** desde el 01 de noviembre de 1995 se encuentra válida y efectivamente afiliada a PROTECCIÓN S.A., luego de la suscripción del respectivo formulario el 01 de octubre de ese mismo año, fls. 30.

Ahora, según viene de verse, lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS administrado en este caso por la AFP PROTECCIÓN S.A., para que, consecuentemente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del art. 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar ad portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para la afiliada de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por

trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero dentro del cual se hallan inmersos los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *"las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales"*
2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes de la afiliada y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información al afiliado, al no suministrarle, *"en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen"* (SL 1689-2019)

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse a al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].***

Lo anterior permite dar aplicación al art. 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Traslado cuotas de administración.

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar la devolución de la totalidad de aportes recibidos, incluyendo el concepto general de cuotas de administración, tema cuestionado en el recurso de apelación de PROTECCIÓN, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con el traslado a COLPENSIONES, de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima» (Resaltado por la Sala)

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

En consecuencia, también en este aspecto de la apelación la sentencia será confirmada, sin que sea procedente declarar prescripción de ninguna clase en tanto no se dan las condiciones para su declaratoria, así como tampoco la indexación según se solicita en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia por COLPENSIONES, pues se

trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o cuando menos en el recurso de apelación, de manera que una decisión en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia.

Indemnización de perjuicios.

Pretensión en la que insiste el apoderado de la demandante por los supuestos perjuicios que PROTECCIÓN S.A. le ocasionó con el traslado realizado al RAIS. Sin embargo, se trata de una pretensión que no está llamada a prosperar según el criterio que en tal sentido ha mantenido de manera uniforme este Tribunal a través de sus distintas salas de decisión.

El hecho de que haya sido necesario contratar apoderado judicial para obtener esa declaratoria de ineficacia y poder retornar a COLPENSIONES, no es una obligación que deba imponérsele en este caso a PROTECCIÓN S.A., en tanto la decisión conlleva el pago, a cargo de dicha entidad, de las costas procesales, concepto dentro del cual van incluidas las agencias en derecho y que se reconocen precisamente como una forma de resarcir los gastos que la parte tuvo que afrontar para el pago de los honorarios de su abogado.

De manera que esta indemnización por perjuicios solo procede cuando se encuentran debidamente acreditados en el juicio. Dicho de otro modo, se trata de una pretensión que no tiene ningún respaldo fáctico, ni mucho menos probatorio que le permita a la Sala tener claridad acerca de la existencia de ese perjuicio, por lo que no hay lugar a su reconocimiento.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada en todas sus partes.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Medellín, el día 25 de junio de 2020.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 073
del 30 de abril de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **85b48eb45aa729ec328e8d319d9b5f6283ea843cc3fb3ecd02b9f082b52dce20**
Documento generado en 29/04/2021 10:24:36 AM